

México: Crisis y modernización del capitalismo

Adolfo Gilly

Adolfo Gilly: Escritor, periodista y politólogo mexicano. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras. Autor de varios libros, siendo su más reciente "México, la larga, travesía".

La dramática caída de los precios del petróleo entre enero y febrero de 1986 coloca a México frente a una repentina agudización de la crisis (anunciada, pero no escuchada...) tan drástica como la que sufrió en la segunda mitad de 1982, que culminó en la nacionalización de la banca por el gobierno del presidente José López Portillo. Este golpe cae sobre la economía mexicana cuando el servicio de una deuda externa de 100 mil millones de dólares ahoga las posibilidades de crecimiento y en medio de un proyecto de reestructuración industrial y económica del país a mediano y largo plazo lanzado por el gobierno de Miguel de la Madrid para intentar una salida capitalista moderna de la crisis.

Este proyecto requiere tanto la influencia de capitales extranjeros (reacios todavía a llegar en las cantidades esperadas por el gobierno mexicano) como la disponibilidad de divisas para renovar y racionalizar la planta productiva (divisas cuyo aflujo caerá una vez más por el efecto combinado de la caída del petróleo, las altas tasas de interés que elevan el servicio de la deuda, y la incesante fuga de capitales mexicanos que, atraídos por esas mismas tasas, se incorporan al giro internacional del capital especulativo). Nuevamente cuestionada la capacidad de importar, el proyecto de modernización para salir de la crisis también queda en cuestión. La deuda externa, utilizada por el FMI y la banca mundial como el gran disciplinador de las economías subordinadas de los países deudores (y en consecuencia de su política), se convierte en un estrangulador.

No tiene interés Estados Unidos en una catástrofe mexicana. Más bien la teme, como lo declaró en febrero de 1986 nada menos que George Shultz. Pero quiere aprovechar al máximo las ventajas que la crisis da a los fuertes sobre los débiles para buscar una salida que asegure, no el estancamiento de México, sino una nueva subordinación estructural (no sólo comercial o financiera) "modernizada" del desarrollo industrial mexicano a las tendencias y necesidades de la reestructuración de la economía de Estados Unidos, explicitadas en los proyectos reaganianos de "reindustrialización" sobre nuevos ejes productivos y geográficos y de "redespigue mundial" de sus transnacionales.

El gobierno mexicano pide negociar y niega la posibilidad de una moratoria unilateral. Pero prácticamente amenaza con que ésta estallar por incapacidad material de pago. Como en otros casos, voceros de Washington piden amplia libertad de comercio y contención de la fuga de capitales, reclamos contradictorios entre sí. Por otra parte, la transferencia de capitales mexicanos hacia Estados Unidos y otros países no es sólo desconfianza por los riesgos de la economía mexicana y hábito conservador de los capitalistas de este país, sino también respuesta a la tendencia generalizada que desplaza capitales del ciclo productivo al ciclo especulativo a nivel mundial y manifestación mexicana del proceso general de internacionalización del capital.

Estas son las exigencias, las urgencias y los procesos del corto plazo, que por su extrema agudización parecen dominar toda la escena y, como sucede con la deuda externa, abruma a los protagonistas con su presión insoportable. Cualquiera sea la solución provisoria o duradera a los apremios de la deuda - moratoria como proponen Fidel Castro y la izquierda mexicana -, pago condicionado a un tanto por ciento de los ingresos de divisas como proponen Alan García y economistas nacionalistas mexicanos (entre ellos Carlos Tello, el asesor directo del presidente López Portillo en la nacionalización de la banca), o renegociación como propone el gobierno mexicano -, la economía de México ha llegado con la crisis a la frontera última de un largo ciclo de desarrollo. Está obligada ahora a ir más allá, buscando nuevos horizontes. Ese es el sentido de los proyectos modernizadores. Interesa entonces ver, más allá de la oprimente coyuntura, cuáles son esos proyectos, cuál su lógica interna y cuáles su solidez, su fragilidad y sus perspectivas futuras.

LA CRISIS DEL FIN DE SIGLO

Con la década de los 80, México ha entrado en años de viraje: en la economía, en la política, en las relaciones entre las clases y con el mundo. No es ésta la excepción sino la regla en estos años, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética y desde Polonia hasta Argentina. La ola de fondo que rige este movimiento está indudablemente, en la economía mundial: el fin de la larga fase expansiva posterior a la Segunda Guerra Mundial, la nueva revolución tecnológica de la era microelectrónica, la reestructuración del capitalismo y del mercado mundial, la recomposición de las clases y de las relaciones entre las clases y entre las naciones. En la economía, en la política, y en la sociedad y su cultura, a este panorama se lo nombra con una palabra: **crisis**.

La crisis, signo de la época y heraldo del nuevo milenio, se presenta con rasgos específicos, únicos e irrepetibles en cada país. México, frontera de los pobres del mundo con Estados Unidos, el más rico y poderoso entre los ricos, vive esta crisis con una intensidad particular. El gran capital y el Estado mexicanos, dueños de la iniciativa en la primera mitad de esta década, están tratando de organizar su salida de la crisis a través de una reestructuración de la economía (un nuevo modelo de acumulación), una nueva inserción en el mercado mundial y, en consecuencia, un nuevo modo de dominación.

El cambio propuesto: pasar del crecimiento basado en la sustitución de importaciones y la exportación de petróleo y productos primarios, a uno sustentado en la exportación de manufacturas, significa la inversión de una tendencia histórica que cubre al menos los últimos cincuenta años. Tampoco es ésta una situación exclusivamente mexicana se inscribe en lo que se ha denominado la "**crisis del Estado social**" en Estados Unidos, el desmantelamiento reaganiano (forzosamente parcial) del **New Deal** rooseveltiano y su sucesor, el **Fair Deal** de la posguerra; en Gran Bretaña, el thatcherismo; en Argentina, el desmantelamiento del pacto social peronista proveniente de fines de los 40.

El equivalente mexicano fue el pacto cardenista de los años 30, cuyos pilares sociales - incrementos salariales, organización obrera, reparto agrario, educación socialista, protección social del Estado -, se implantaban en el suelo entonces firme de la estrategia de sustitución de importaciones, ampliación del mercado interno, nacionalizaciones y protección a la industria nacional favorecida por la fragmentación del mercado mundial como secuela de la crisis de esos años. Lo completaba un sólido componente político, similar al que tuvo el peronismo años después: las grandes movilizaciones de masas obreras y campesinas que configuraron el cuerpo social del cardenismo mexicano.

Terminada la presidencia del General Lazaro Cárdenas en 1940, este pacto sufrió un primer quiebre profundo con su sucesor, Manuel Avila Camacho, y con la Segunda Guerra Mundial durante la cual el salario obrero real bajó a la mitad en cuatro años. Reorganizada la economía sobre esta derrota de las conquistas obreras, se echaron los fundamentos del subsiguiente desarrollo capitalista mexicano, en el cual la curva salarial comenzó a ascender desde 1952 hasta recuperar en 1968 los niveles de 1939 y llegar en 1976 a su máximo histórico, una participación del 40,3 por ciento en el producto bruto interno (PBI) de entonces. En esos mismos años, a un crecimiento relativamente regular del PBI del orden del 6 al 7 por ciento anual, correspondió un crecimiento significativo de la ocupación (pero en todo caso insuficiente para absorber el crecimiento de la oferta de mano de obra) y un crecimiento menos que satisfactorio de la productividad, punto débil de la economía mexicana que se agravó en los años más recientes.

El estallido de la crisis mexicana a mediados de 1982 (después de la caída de los precios del petróleo en 1981) señaló el agotamiento de esas condiciones materiales del pacto social. El salario se desplomó a un 27 por ciento del PBI a partir de 1983, mientras subieron rápidamente los índices de desocupación. La crisis puso al descubierto todos los desequilibrios internos y externos acumulados en la economía durante el período de la sustitución de importaciones y del llamado "milagro mexicano", a partir de los años 50.

EL DESAFÍO

La respuesta del gobierno de Miguel de la Madrid está formulada en el Plan

Nacional de Desarrollo 1983-1988: el país necesita exportar y desplazar el centro de gravedad de sus exportaciones, del **petróleo** y los **productos primarios**, a las **manufacturas**. El desafío significa ingresar a una nueva fase del desarrollo capitalista mexicano. Aparece tanto más urgente cuanto que no sólo se ha agotado el dinamismo de la fase precedente, sino que también se está ensanchando la brecha tecnológica con el vecino Estados Unidos e incluso con países de similar nivel de desarrollo en América Latina, como Brasil, que ya ha avanzado en el proyecto de sustitución de exportaciones que encara hoy México.

Este proyecto presupone en sus promotores la voluntad de utilizar dos grandes ventajas comparativas, una económico-social y la otra geopolítica, para la nueva inserción mexicana en el mercado mundial.

La primera reside en las características de la fuerza de trabajo: bajos salarios, flexibilidad en su utilización por las empresas y capacidad técnica. Los salarios mexicanos compiten a la baja con los de Hong Kong, Singapur y algunos países del sudeste asiático. Los planes oficiales proyectan mantener esos niveles deprimidos hasta inicios de los años 90. La flexibilidad en la utilización de la fuerza de trabajo (es decir, las normas de trabajo intensivas impuestas unilateralmente por las empresas) está asegurada por el escaso o nulo control de los trabajadores sobre los procesos de trabajo en las nuevas plantas (ritmos, intensidad, cambios de tareas), debido al bajo nivel de organización obrera, el control ejercido por los sindicatos oficiales y la presión de la desocupación sobre el mercado de trabajo. La capacidad técnica - posiblemente más acentuada en el norte - proviene de la formación industrial del país y de la educación de las escuelas técnicas del Estado.

La ventaja comparativa geopolítica consiste, como es obvio, en la vecindad con el mayor mercado consumidor y de capitales del mundo, Estados Unidos, con el cual México mantiene más de dos tercios de su comercio exterior, y en el hecho de que Estados Unidos no puede permitirse con su gran vecino del sur (80 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados, más de tres mil kilómetros de frontera y un enorme flujo migratorio en ambos sentidos) el riesgo de abandonarlo a su suerte con las consiguientes consecuencias sociales. Por otro lado, para las eventuales exportaciones manufactureras mexicanas esta ventaja es crucial, por la importancia que adquiere en la competencia actual la reducción del tiempo de circulación del capital, con relación a países de la cuenca del Pacífico o de América del Sur. Esto se acentúa porque la región colindante con México - el oeste y el sur de Estados Unidos - es la que en este país registra el mayor dinamismo económico: **California, tomada separadamente, es hoy la sexta economía mundial**. Del mismo modo, el norte de México es hoy su área económicamente más dinámica.

INTEGRACION GEOGRAFICA

A lo anterior se suma la geopolítica el territorio mexicano forma un continuum con los Estados Unidos. México esta en América del Norte e integra la zona que el Pentágono considera como primera prioridad militar, entre Alaska y el Canal de

Panamá, aquella cuyos recursos naturales, económicos y humanos, pueden ser mucho más inmediatamente controlables, en caso de conflicto mayor, que Taiwan, Singapur, Hong Kong Medio Oriente e incluso América del Sur.

Es reveladora la ubicación de las nuevas plantas automovilísticas en los estados del norte y centro-norte de México, la mayor parte de cuya producción está orientada al mercado estadounidense: Nissan en Aguas Calientes, Ford en Sonora y Chihuahua, General Motors y Chrysler en Coahuila, Renault en Gómez Palacio: 2 millones de motores de automóviles serán exportados hacia Estados Unidos en 1986. Nuevos proyectos de los capitales estadounidenses (la IBM, entre otros), japoneses y europeos dispondrán de estímulos antes prohibidos, por ejemplo la autorización para operar con capital total o mayoritariamente extranjero, derogando en los hechos disposiciones legales que fijaban la obligación de tener un 51 por ciento de capital nacional por empresa. En cuanto a tecnología y organización del trabajo, estas plantas están al mismo nivel que sus matrices en sus países de origen.

El levantamiento de las medidas proteccionistas de la industria nacional propias de la fase de sustitución de importaciones (que se realiza en forma todavía paulatina) tiene lugar sobre todo a través de la sustitución de los permisos de importación por tasas arancelarias. Esto supone favorecer un esquema de modernización forzada por la combinación entre la crisis y la competencia exterior, que se agudizará con la reciente entrada de México al GATT, en cuyo marco sobrevivirían y se fortalecerían las empresas más aptas para sostener la competencia en el mercado externo.

Estos cambios tenderán a acelerar el intenso proceso de interpretación económica, comercial e incluso cultural entre el norte de México y Estados Unidos, acentuado por el tránsito ininterrumpido de trabajadores mexicanos en uno y otro sentido y la influencia recíproca de las normas de consumo y las formas de cultura, así como por el flujo masivo del contrabando, fenómeno sobre el cual existe ya un amplio folklore de canciones populares mexicanas (donde, por supuesto, los contrabandistas son los buenos y la policía fronteriza estadounidense - la **migra** - los malos). En esta turbulenta frontera se está concentrando y procesando uno de los nuevos y grandes polos de cambio y desarrollo mundiales.

OBSTACULOS EXTERNOS E INTERNOS

Este proyecto de modernización de la economía y la sociedad mexicanas tropieza con dificultades y obstáculos externos e internos que generan fuertes contradicciones.

Los externos son la competitividad exasperada del mercado mundial en la crisis; el estrechamiento relativo de los mercados para las líneas de exportación que quiere fortalecer México; y la caída de los flujos comerciales en los países centrales, que afectan las exportaciones de los periféricos. A estos obstáculos vino a sumarse, en

febrero de 1986, uno mayor: el nuevo desplome del mercado petrolero que lleva hasta lo insoportable el estrangulamiento externo de la economía mexicana.

Los internos son la baja productividad social del trabajo en México y el limitado dinamismo de su crecimiento; el débil ahorro interno privado y la insuficiente formación de capital, donde se combinan los hábitos dispendiosos de consumo de la clase capitalista local (muy lejana, por cierto, de la "ética protestante") su conservadurismo y timidez para arriesgarse en nuevas inversiones (fomentados por el hábito de la larga protección estatal) y su propensión a refugiarse en la especulación financiera nacional e internacional; la heterogeneidad de la planta productiva, con puntas avanzadas y vastos sectores rezagados; el bajo nivel del control de calidad, tanto por los fabricantes y los trabajadores como por los vendedores y los consumidores, lo cual coloca a la producción mexicana en desventaja frente a las severas normas de calidad internacionales; la carencia de adecuadas redes de comercialización internacional, sector fuerte de las empresas transnacionales. Punto de confluencia de las desventajas y desequilibrios externos e internos, la carga de la elevadísima deuda externa (cercana ya a los 100 mil millones de dólares) y de su servicio se suma para estrangular cualquier proyecto de recuperación de la economía. Con la caída de los precios del petróleo por debajo de los 15 dólares por barril (una reducción de 8.68 dólares entre enero y febrero de 1986) es difícil imaginar alguna vía "normal", dentro de la reglas del actual orden económico cuyo gran disciplinador es el FMI, para superar esta situación de asfixia.

El conjunto de estos obstáculos y dificultades se conjuga para hacer que, inexorablemente, las expectativas de éxito del proyecto tiendan a recaer más y más sobre la ventaja comparativa económico-social el bajo nivel salarial, inevitable variable de ajuste. Pero es precisamente la fragilidad final de esta ventaja, los que nos lleva a reforzar nuestra hipótesis: el capitalismo mexicano, que no puede eludir la transición obligada hacia un nuevo modelo de acumulación, tendrá que acentuar el peso y el uso de su otra ventaja comparativa, la continuidad con Estados Unidos, en la perspectiva de una creciente integración subordinada de la economía mexicana con la estadounidense, en una modernización forzada desde arriba y desde afuera que lo llevaría a integrarse, de cara al Pacífico, en un nuevo polo de desarrollo económico mundial de magnitudes todavía difícilmente mensurables.

Todo este proyecto de "modernización desde arriba" tropieza en México con una arcaica configuración de clases, mantenida como en invernadero por la prolongación perversa del viejo pacto social bajo la forma del paternalismo y el arbitraje estatal y la regulación corporativa de los conflictos sociales. Esta situación conspira contra una extensión y sistematización de la disciplina industrial en todos los ámbitos de la sociedad y, por consiguiente, contra la elevación sostenida de la productividad social del trabajo; es decir, debilita las premisas básicas de los proyectos modernizadores.

LA "ALIANZA PERVERSA"

El bajo dinamismo de la productividad es efecto de la combinación entre el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el estallido de la crisis y la prolongación perversa del antiguo pacto social populista cuando se han deteriorado las premisas materiales - al prolongado crecimiento de la economía - que lo sustentaban. El aparato burocrático-corporativo de los sindicatos, agente del Estado en el movimiento obrero y garante de la inmovilidad obrera es ese pacto, así como la burocracia estatal urbana que controla la organización campesina, son estructuras que protegen la ineficiencia, la indisciplina y la baja productividad - mucho más cuando no pueden ofrecer aumentos en los salarios de obreros y empleados o en los ingresos de los campesinos - y fomentan la corrupción incluso entre los trabajadores, que a falta de otra perspectiva de organización y lucha independientes se ven llevados a defender su precario nivel de vida por la vía de prolongar la "alianza perversa" con esas burocracias.

En la medida en que lo fundamental del modo de dominación y de los mecanismos de consenso social del Estado mexicano se apoya sobre esas estructuras burocrático-corporativas, el gobierno no puede controlar ni disminuir los efectos también perversos que esa situación conlleva para la productividad, la disciplina industrial y el conjunto del funcionamiento de la economía. Se abre así una contradicción frontal, un **espacio de crisis**, entre el proyecto de modernización y el modo de dominación, entre la economía y la política.

Entonces la modernización mexicana se torna heterogénea, discontinua y dispersa en cuanto el **sistema político** con sus connotaciones políticas, nutridas de la ideología populista de la revolución mexicana y de la persistencia de consistentes fragmentos del pensamiento agrario precapitalista en las mismas zonas urbanas, **posterga** la definición nítida de las clases; **prolonga** las relaciones de dependencia personal y sus ideologías; **conserva** las relaciones y las estructuras corporativas; **traba** la conquista de la ciudadanía y la democracia; **deforma** el mercado político y la circulación de informaciones e ideas; **mantiene** la tradición y las prácticas del Estado patrimonial, según las cuales éste es para los funcionarios (que son políticos-empresarios) una fuente de enriquecimiento personal y no el administrador colectivo eficiente de los intereses de las clases dominantes (presentados como "interés general") y de su sector hegemónico.

Sin la transformación del sistema político se traba la transformación de la economía. El desafío para el régimen gobernante mexicano, en el cual se confunden el Estado y el partido en el poder desde 1929 (el actual Partido Revolucionario Institucional), consiste en avanzar en la superación de los pactos arcaicos en los cuales se asienta su estabilidad y lograr una nueva configuración política del nuevo sistema de alianzas políticas y sociales. La dificultad reside en que se propone hacerlo desde adentro y desde arriba, sin rupturas ni movilizaciones. La tarea no es sencilla.

Sin embargo, no tiene otra salida. El viejo México surgido de la revolución y del cardenismo ha cambiado. Se ha desarrollado un fuerte polo del gran capital nacional asociado con las multinacionales (sobre todo a través del sólido y amplio puente del capital estatal y de sus empresas) e inserto en el giro del capital financiero internacional. Ha crecido, en el polo opuesto, una numerosa, joven y socialmente fuerte (pero políticamente débil) clase de asalariados industriales y de servicios, en grandes centros urbanos a donde se ha desplazado desde hace mucho el centro de gravedad de la vida política y las decisiones nacionales. Se ha extendido la proletarización agraria, subordinando, absorbiendo y, en cierto modo, paradójicamente potenciando las arraigadas formas y experiencias de movilización campesina provenientes de la revolución mexicana en una actualización de la lucha de clases en el campo.

NESECIDAD DE UN PROYECTO DE MODERNIZACION

Este es el país nuevo en el cual los actuales herederos del antiguo régimen político surgido de la revolución de 1910-1920 intentan llevar adelante su nuevo curso. En otros fue necesaria la violencia armada del Estado para imponer el cambio: el caso clásico sería el argentino, donde el nivel de organización y autonomía obrera obligó a recurrir a la dictadura militar terrorista para destruir el viejo pacto corporativo peronista, cuyas bases materiales ya habían sido corroídas por la crisis.

En México es el aparato dirigente del mismo régimen político quien intenta realizar su propia mutación. Este intento entraña una serie de dificultades mayores: a) imponer una política de austeridad mediante un aparato político-estatal cuyo consenso y cuyos hábitos políticos se formaron en la larga fase "redistribucionista" precedente; b) romper la alianza del Estado con la mediana y pequeña industria, los trabajadores, los campesinos, cuando esa alianza es la base de sustentación del régimen político; c) en consecuencia, dejar en libertad de organizarse autónoma e independientemente del Estado a las fuerzas de las clases antagónicas, hoy retenidas en los marcos del antiguo pacto; d) consolidar una nueva alianza o bloque dominante: la gran burguesía (incluidos agroexportadores y finanzas), las transnacionales y, como puente y sustento, el capital estatal, que en esta transición tenderá a suplir las timideces y parcialidades del capital privado nacional; e) tratar de no repetir las experiencias del Cono Sur y en lo posible mantener normas democráticas sin las cuales, como se ha visto, no puede haber una modernización capitalista sustantiva en cuanto a organización del trabajo y a elevación autoalimentada de la productividad.

Como este proyecto de renovación se contradice con los hábitos y la educación política heredados por el aparato político-estatal, entraña un riesgo de crisis política y parálisis ante coyunturas difíciles o acontecimientos mayores de la vida nacional. El desconcierto y la debilidad de las reacciones oficiales iniciales frente a la catástrofe sísmica de septiembre de 1985 en la ciudad de México puede ser un anticipo de esos riesgos. Los desafíos sociales que podrían presentarse en el porvenir son, por necesidad, más complejos y desconcertantes para el régimen que

los desafíos de la naturaleza. La tradición del régimen político mexicano es, en estos casos, de respuestas violentas. Aunque este tipo de respuestas estaría en contradicción con la forma política actual del proyecto, tendería a salvar su sustancia económica. Por eso debe incluirse con seriedad en el rango de las posibilidades.

La modernización capitalista implica necesariamente una modernización de los conflictos sociales. Si desde la iniciativa del Estado se conforma, como viene sucediendo, un nuevo bloque dominante, esto plantea en la realidad la posibilidad de conformar un nuevo bloque de los dominados: los trabajadores industriales, ellos mismos en mutación, y además carentes todavía de independencia política frente al Estado y de un partido político propio en el cual se reconocen mayoritariamente, no pueden ofrecer por sí solos una alternativa al nuevo curso del capital que se abate sobre su vida y sus conquistas. Una transición política es necesaria para la reorganización independiente de los trabajadores mexicanos. Esta transición requerirá nuevas alianzas sociales y la elaboración de un proyecto alternativo de modernización desde abajo, que no podrá ser la repetición actualizada de consignas populistas de los años 60 porque ese México ya no existe.

México está cambiando. Como su historia enseña, este cambio no se realizará sin conflictos políticos y sociales. Esta dinámica interna será decisiva para determinar cualquier forma efectiva (y no sólo declaratoria) de defensa de la nación y de ruptura de la subordinación al poderosísimo vecino del norte. Por esta misma razón la evolución futura de México, que es nuestra frontera común con Estados Unidos, interesa en el más alto grado a toda América Latina.